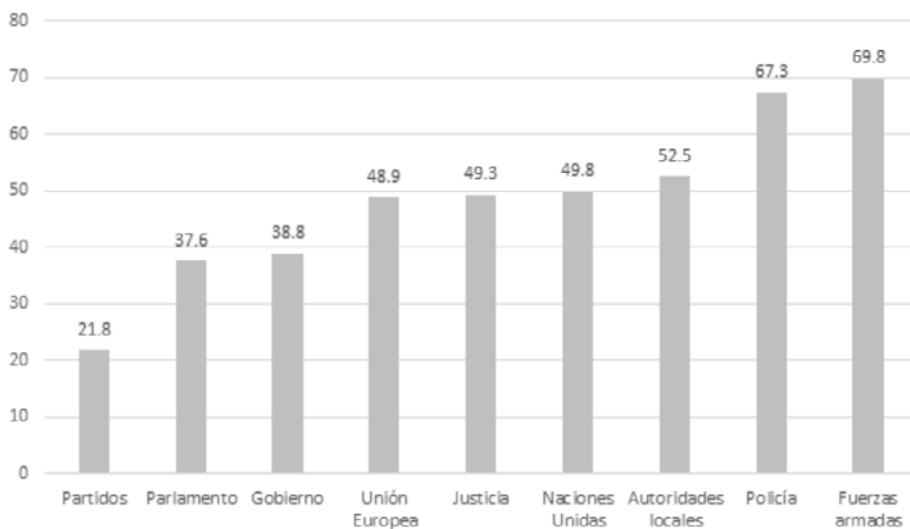


## El desafío antisistema\*

Fernando Casal Bértoa y José Rama

En las últimas décadas, y con mayor intensidad desde la Gran Recesión que comenzó en 2008, el apoyo a los partidos políticos tradicionales ha disminuido. Con mayor frecuencia, los ciudadanos perciben a los partidos como entidades corruptas que, en lugar de representar los intereses de sus electorados, se comportan como “servicios públicos” y agentes estatales (Biezen, 2004; Katz and Mair, 2018). De hecho, ya los datos del Eurobarómetro de 2019 mostraban que la gente tiene menos confianza en los partidos y las instituciones representativas, en las que tienen voz, que en entidades como la policía y el ejército que no son ni representativas ni electoralmente responsables. De entre todas las instituciones cívicas incluidas en el estudio, los partidos aparecen en último lugar, y disfrutan de la confianza de tan solo un 22 por ciento de los encuestados (ver Figura 1). Los efectos de esta desconfianza en las instituciones representativas son evidentes: disminución de la identificación partidista, baja afiliación a partidos políticos y bajos niveles de participación electoral (Mair, 2013). Entre los ciudadanos que aún acuden a las urnas, muchos apuestan por partidos diferentes en cada elección y, por lo general, prefieren nuevas formaciones políticas, muchas de las cuales se definen, además, como oposición al *establishment* político.

**Figura 1.** Confianza en los partidos políticos y otras instituciones estatales en Europa, 2019

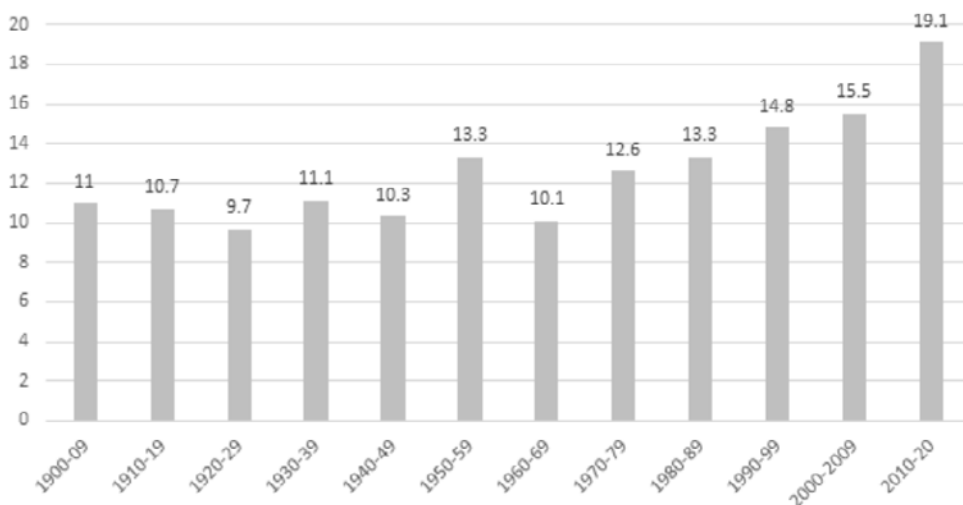


**Fuente:** Análisis de los autores basado en datos del Eurobarómetro 91.5 (junio-julio de 2019). El eje vertical representa la proporción de encuestados que respondieron que “tienden a confiar” en la institución respectiva.

\* El texto se basa en el artículo: The Antiestablishment Challenge. Mainstream Parties in Crisis, publicado en inglés, en el Volumen 32, Número 1, enero de 2021 del *Journal of Democracy*: <https://muse.jhu.edu/article/778231>. La Asociación Mexicana de Ciencias Políticas agradece a los autores y al *Journal of Democracy* la autorización para publicarlo ahora en su versión en español.

Como podemos ver en la Figura 2, la proporción de votos a partidos anti-*establishment* (Abedi, 2004) ha aumentado considerablemente desde la década de 1960, y especialmente durante la última década. Esta tendencia ha afectado a países de todo el mundo y partidos a ambos lados del espectro político (Mudde, 2019), aunque el populismo de izquierda (comunista) ha tenido tradicionalmente más éxito en América Latina y el populismo de derecha (nativista) en Europa. El mundo académico no se ha quedado atrás, y en los últimos años han proliferado las publicaciones que exploran las causas y consecuencias del auge de los partidos antisistema.

**Figura 2.** Apoyo a partidos anti-establishment por década (1900-2019)



**Fuente:** Casal Bértoa y Enyedi (2021)

En lo que a las consecuencias se refiere, dos se consideran generalmente las más importantes: el cambio en el sistema de partidos y su desinstitucionalización, por un lado, y el aumento del antiliberalismo y el retroceso democrático, por el otro. Sin embargo, hay una falta de consenso entre los académicos sobre si el éxito electoral de estos partidos erosiona o fortalece la calidad de la democracia. Una primera escuela de pensamiento sostiene que los partidos antisistema en general, y los partidos populistas en particular, son dañinos para la democracia representativa porque constituyen una “inversión perversa de los ideales y procedimientos de la democracia” (Rosanvallon, 2008: 265). Un segundo grupo ve el populismo más como una oportunidad que como una amenaza.: estos académicos consideran que la ola populista es una llamada de atención que podría conducir a la “democratización de la democracia al permitir la agregación de las demandas de quienes pertenecen a sectores políticamente excluidos” (Laclau, 2005: 78). Otros analistas argumentan que los efectos netos del populismo sobre la democracia no están predeterminados, sino que deben evaluarse empíricamente. En resumen, “dependiendo de su poder electoral y del contexto en el que surge, el populismo puede funcionar *como* una amenaza *o* un correctivo para la democracia” (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017: 79, cursilla en el original).

Mirando la otra cara de la moneda, hay que decir que la opinión sobre el impacto de los partidos antisistema en la democracia depende de qué definición de democracia (más o menos comprehensiva) tengamos en mente, así como de la concepción normativa de cómo esta debiera funcionar (Urbinati, 1998). Asumiendo esto, el populismo no

necesariamente tiene que ir en contra de ciertas concepciones de la democracia (sin adjetivos). Es diferente, eso sí, si examinamos los partidos antisistema en relación con un tipo de democracia concreta, la democracia liberal.

Si definimos la democracia liberal como un régimen político que no sólo respeta la soberanía popular y el gobierno de la mayoría, sino que también establece instituciones independientes dedicadas a salvaguardar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la protección de las minorías, la relación negativa entre populismo y democracia es más clara. Dado que los partidos antisistema abogan por la supremacía irrestricta de la voluntad del pueblo (o la voluntad de una clase o raza elegida) y rechazan fundamentalmente “las nociones de pluralismo y, por lo tanto, los derechos de las minorías, así como las ‘garantías institucionales’ que deberían protegerlos” (Mudde and Kaltwasser, 2017: 81), estas fuerzas políticas - ya sean populistas, fascistas, comunistas o como se quiera definir las - van en contra del componente liberal de la democracia. Confirmando esta hipótesis, en un estudio reciente de 28 países de la UE desde el final de la Segunda Guerra Mundial descubrimos que, incluso teniendo en cuenta otros factores (económicos, institucionales, sociológicos y temporales), la democracia liberal se deteriora a medida que los partidos anti-*establishment* tienen un mayor éxito electoral. Nuestros resultados muestran, además, que otras dimensiones de la democracia (electoral, deliberativa y, en menor medida, participativa) también sufren al aumentar el apoyo a estas formaciones. Estos hallazgos subrayan que los partidos antisistema en general, y los partidos populistas en particular, son un problema real para la democracia (Rama y Casal Bértoa, 2020).

## ¿Enfermedad o síntoma?

Si el surgimiento de los partidos antisistema realmente amenaza la democracia, ¿qué podemos hacer para remediarlo? Para responder a esta pregunta primero debemos comprender qué factores han impulsado el apoyo a este tipo de fuerzas. Los académicos generalmente han identificado tres factores principales: las recesiones económicas (especialmente la recesión posterior a 2008), los cambios sociales (el desvanecimiento de los clivajes tradicionales como la clase social y la religión, junto al surgimiento de nuevas divisiones surgidas de procesos tales como la globalización, la desnacionalización o la inmigración), y las crisis institucionales (especialmente la que ha afectado a los partidos políticos tradicionales).

En un estudio reciente que examina las democracias más consolidadas de Europa Occidental desde 1848 (Casal Bértoa y Rama, 2020), encontramos que el mal funcionamiento de los partidos políticos tradicionales —especialmente en términos de representación y movilización— ha sido crucial para el éxito electoral de los partidos antisistema, particularmente desde el 2008. En efecto, la crisis de los partidos tradicionales ha sido aún más significativa en este sentido que las transformaciones sociales como la globalización y la secularización. Contrariamente a nuestras expectativas previas, el desarrollo económico *per se* e incluso la crisis económica de 1929 no actuaron como determinantes del apoyo a los actores políticos antisistema, aunque la crisis global de 2008, que fue tanto socio-política como económica, sí lo hizo. En 1929, los partidos tradicionales eran fuertes y los partidos antisistema prosperaron por diferentes razones (particularmente después de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa). Muchas de las democracias que colapsaron en el período de entreguerras en realidad lo hicieron antes de la crisis de 1929 (como en Portugal, España, Polonia, Italia, San Marino y Yugoslavia). El reciente

auge de los partidos antisistema, por el contrario, ha tenido lugar principalmente desde 2008 (piénsese en España, Grecia, Hungría y Alemania). Una vez más, sin embargo, no fue la crisis económica *per se* la que produjo este efecto; sino el impacto que la crisis tuvo en un ambiente de debilidad partidista ya existente. Cuando la Gran Recesión golpeó las democracias de Europa Occidental, éstas ya estaban bajo presión debido a la disfunción de los partidos tradicionales, produciendo grietas que ofrecieron a las fuerzas anti-*establishment* una posibilidad de éxito en la escena política.

En otras palabras, la verdadera enfermedad que aqueja a las democracias representativas hoy día es la crisis de los partidos políticos tradicionales; el auge de los partidos antisistema es simplemente un síntoma. Es importante tener esto en cuenta si es que estamos buscando una cura. Hay una gama de opciones que se ofrecen a los partidos tradicionales que buscan combatir el desafío anti-*establishment*, hablamos de extirpación, discriminación, reconciliación y regeneración. Sin embargo, solo una de estas estrategias promete abordar con eficacia la dolencia democrática subyacente: el desencanto de los ciudadanos con los partidos tradicionales que no han sabido adaptarse a una nueva realidad social y, por lo tanto, no han procedido a representar los intereses de sus electores.

## Cuatro remedios, pero solo una verdadera cura

Tradicionalmente, los académicos han considerado que las estrategias de los partidos del *establishment* hacia los partidos contrarios al sistema se pueden incluir en una de estas dos categorías: inclusión y exclusión. Esta última incluye la demonización, la construcción de un cordón sanitario para excluir a estos partidos del proceso de gobierno y la llamada opción nuclear consistente en restricciones legales. La primera categoría abarca tácticas de cooptación y colaboración, que tratamos aquí como parte de la misma estrategia de reconciliación (Heinze, 2018). Más allá de esta dicotomía se encuentra una estrategia alternativa más audaz, que llamaremos de regeneración.

**Extirpación.** Adoptar una estrategia de extirpación (para ser más precisos, prohibición) en respuesta a los partidos antisistema presenta tres grandes problemas: moral, legal y práctico. Tanto los académicos como otros expertos han venido debatiendo la legitimidad moral de tales medidas durante años. Desde que Karl Loewenstein (1937), escribiendo sobre la toma del poder por los nazis en Alemania, introdujese el concepto de “democracia militante”, ríos de tinta han corrido en lo que a la legitimidad de prohibir los partidos se refiere. Algunos argumentan que las prohibiciones son necesarias para permitir que las democracias se protejan contra las tomas de poder autoritarias, ejemplificadas por la “Marcha sobre Roma” de 1922 en Italia o el “Febrero victorioso” de los comunistas en Checoslovaquia allá por 1948. Para otros, la prohibición de los partidos políticos va intrínsecamente en contra de principios democráticos fundamentales como la libertad de expresión y asociación.

Los defensores de este último punto de vista argumentan que, en una democracia, todos los miembros del público, incluidas las fuerzas políticas de extrema derecha (fascista, nacionalista, clerical) y de extrema izquierda (comunista, bolivariana), tienen derecho a formar un partido a fin de poder lograr sus objetivos políticos siempre y cuando los persigan de manera democrática y no violenta. Aquellos que adoptan la perspectiva opuesta argumentan que las experiencias alemana, italiana, húngara, rusa, turca y venezolana, por nombrar algunos ejemplos, muestran que una vez que los partidos extremistas llegan al gobierno, rápidamente comienzan a dismantelar el sistema democrá-

tico que tan generosamente les permitió llegar el poder en primer lugar. El resultado es un deslizamiento hacia el totalitarismo, el autoritarismo competitivo o, en el mejor de los casos, la democracia liberal.

Un segundo conjunto de problemas con este enfoque se centra en su legalidad: ¿respeto la prohibición de partidos los “estándares legales”? ¿Están en sintonía con las “mejores prácticas” internacionales? Con respecto al primer asunto, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 limita toda restricción a la libertad de asociación con la única excepción de aquellas que resulten “necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud o moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás”. Esta disposición, copiada vagamente en otros documentos legales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Art. 11), se ha venido interpretando de manera diversa en diferentes países. Si bien la mayoría de las legislaciones europeas en algún momento han considerado necesario adoptar la posibilidad de prohibir partidos, esto no ha sido el caso en los países de América del Norte.<sup>1</sup> En general, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que, si bien las democracias tienen derecho a defenderse contra partidos extremistas, las prohibiciones son lícitas sólo cuando existe evidencia plausible de que los actos y la retórica de un partido ponen en riesgo la democracia, y no cuando el partido—usando medios legales y democráticos—simplemente promueve cambios legales o constitucionales que son compatibles con los principios democráticos fundamentales.

Discernir las “mejores prácticas” cuando se trata de prohibir partidos - ¿podemos incluso identificar un “modelo” de regulación en este asunto? - es más complicado. En algunos sistemas legales (como en España, Eslovaquia y la República Checa) los partidos están prohibidos sólo en base a sus acciones, mientras que en otros (como en Alemania y Turquía) también se permite la prohibición de partidos en base a su ideología. También hay diferencias en cuanto a si se pueden prohibir los partidos para evitar daños “potenciales” (aquellos que se derivan, por ejemplo, de ideologías antidemocráticas o secesionistas) o sólo en respuesta a daños “reales” - como se refleja en los conflictos internos antidemocráticos, opacidad financiera, etc. (Bourne y Casal Bértoa, 2017). Sin embargo, hay un área de convergencia: la mayoría de las legislaciones europeas están de acuerdo, al menos, en que las prohibiciones de los partidos deben considerarse una medida excepcional para “aplicarse sólo en casos extremos ... cuando todas las medidas menos restrictivas hayan sido consideradas inadecuadas”, entendiendo como tales únicamente aquellas “en las que el interesado haga uso de la violencia o atente contra la paz civil y el orden constitucional democrático del país” (Comisión de Venecia y OSCE/ODIHR, 2011).<sup>2</sup>

En resumen, las prohibiciones de partidos se aceptan como legales y moralmente legítimas en muchos países. También son extremadamente populares hasta el punto de que, con este enfoque “militante” a fin de poder defender los sistemas democráticos, gozan de apoyo incluso entre ciudadanos que tienen actitudes negativas hacia la democracia (Leeuw y Bourne, 2020). Sin embargo, queda en el aire la pregunta de si las prohibiciones de los partidos son también efectivas. Examinar las experiencias democráticas europeas desde el final de la Primera Guerra Mundial muestra que las prohibiciones de partidos han tenido éxito en algunos casos, pero han sido un fracaso en otros. En uno de

---

1 El intento de prohibir el Partido Comunista en los Estados Unidos en 1954 fue considerado inconstitucional.

2 Véase también Comisión de Venecia (2000).

los ejemplos de éxito más conocidos, tanto el neonazi Partido Socialista del Reich como el Partido Comunista fueron prohibidos en la Alemania de la década de los 1950, lo que condujo a la estabilización del sistema de partidos en torno a socialistas, liberales y demócratas cristianos y la consiguiente consolidación de democrática. De manera similar, las prohibiciones tanto del Partido Comunista como del Movimiento Lapua de extrema derecha a principios de la década de 1930 ayudaron a Finlandia a evitar una toma de control autoritaria como la que ocurrió en las vecinas Estonia y Letonia.

Por el contrario, la prohibición resultó ineficaz en Turquía, con mucho el país europeo con el mayor número de prohibiciones en tiempos de paz (Casal Bértoa y Bourne, 2017). Este caso ilustra claramente una de las formas en que la prohibición de un partido puede resultar contraproducente: la refundación del partido. El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Recep Tayyip Erdogan, que ganó las elecciones parlamentarias de 2002 y ha procedido gradualmente a dismantelar la democracia liberal del país, entró en escena como el sucesor más moderado de dos partidos islamistas anteriores que habían sido disueltos judicialmente (el Partido del Bienestar y el Partido de la Virtud, prohibidos respectivamente en 1998 y 2001). Para que las prohibiciones sean efectivas, entonces, debemos prohibir partidos (antisistema) continuamente. Y esto no parece tener mucho sentido.

Las prohibiciones de los partidos también pueden fallar debido a eventuales cambios en la ley o la jurisprudencia.<sup>3</sup> Esto es exactamente lo que sucedió en España con EH Bildu, el sucesor más reciente del brazo político (Batasuna) del movimiento armado separatista vasco conocido como ETA. Ha habido intentos sucesivos de prohibir esta formación política: Batasuna fue ilegalizada en 2003, y el antecesor inmediato de EH Bildu (llamado simplemente Bildu) fue ilegalizado brevemente en 2011 antes de que esta decisión fuera anulada por el Tribunal Constitucional español. A pesar de todos estos esfuerzos, en el momento de escribir este artículo EH Bildu es el segundo partido más importante en el parlamento vasco y apoya los gobiernos socialistas en Navarra y España. Su éxito ofrece un recordatorio de que las prohibiciones de los partidos podrían, al otorgar a estas fuerzas políticas un aura de mártires, terminar teniendo efectos contrarios a los inicialmente previstos.

**Discriminación.** Una segunda estrategia utilizada contra los partidos antisistema tiene como objetivo eliminarlos no legalmente, sino psicológicamente. Consiste en marginarlos tratándolos como parias, excluyéndolos del proceso de toma de decisiones y de formación de gobiernos, y en muchos casos incluso absteniéndose de hacer referencia alguna a los mismos. Aunque algunos pueden ver este enfoque como poco democrático, especialmente cuando el partido objeto de la discriminación es el más grande en el parlamento (como el Partido Armonía pro-ruso de Letonia en la pasada legislatura), en comparación con las prohibiciones legales, parece mucho más en línea con las libertades de expresión y asociación, así como el principio de representación.

Quizás el ejemplo más exitoso de este enfoque proviene de la Checoslovaquia de entreguerras, donde los cinco partidos de la llamada “Petka” (formada por los partidos socialista, agrario, demócrata-cristiano, conservador y nacionalista) se unieron para formar gobiernos de amplia coalición y así defender la democracia contra comunistas y

---

3 El Tribunal Constitucional alemán puso fin efectivo a la doctrina de la “democracia militante” en 2017 cuando se negó a prohibir el Partido de la Democracia Nacional (NPD) de extrema derecha, a pesar de considerar que este partido tenía una ideología inconstitucional, ya que el NPD había obtenido sólo el 0,4 por ciento de los votos y, por lo tanto, no representaba una amenaza importante e inminente.

nacionalsocialistas alemanes. Partidos tradicionales participaron en un ejercicio similar durante la denominada Primera República Italiana (1946-1994), dirigido contra partidos comunistas y neofascistas.

La principal debilidad de esta estrategia es que puede resultar demasiado difícil de mantener. Su éxito depende de la aquiescencia de todos los partidos sistémicos, incluidos los nuevos. Incluso en Italia, el llamado “compromesso storico” en la década de los 70 (en el que el Partido Comunista prestó su apoyo externo a los gobiernos democristianos) amenazó con poner fin al cordón sanitario de ese país contra la extrema izquierda. Además, incluso cuando los partidos tradicionales se adhieren a una política de discriminación a nivel nacional, sus representantes en las legislaturas subnacionales pueden decidir romper filas. Esto ha sucedido con el Partido Comunista Checo, Alternativa para Alemania y Vox en España. Tal enfoque “parcial” disminuye la eficacia a largo plazo de este tipo de estrategia discriminativa.

Hay también divergencias sobre el grado de “discriminación política” que debe aplicarse en una estrategia de discriminación como esta. Mientras que algunos partidos sostienen que cualquier tipo de colaboración, ya sea gubernamental, parlamentaria o electoral, está fuera de discusión, otros no consideran que aceptar el apoyo parlamentario de los partidos contrarios al sistema sin otorgarles una presencia real en el gabinete sea una ruptura del cordón sanitario. Además del caso italiano mencionado anteriormente, esto ha sucedido con el Partido Popular Danés a nivel nacional y más recientemente con Vox en algunas regiones españolas.

En tercer lugar, la discriminación, como la prohibición partidista, puede tener un efecto boomerang. Al presentar a los partidos antisistema como “extremistas” y condenar su apoyo como “voto inútil”, los partidos tradicionales podrían ayudar a justificar el estatus de “outsiders” de sus rivales antisistema, fortaleciendo así los sentimientos de solidaridad de sus seguidores y fomentando su radicalización. Al explotar su condición de autoproclamados “mártires” de la democracia, los partidos antisistema podrían incluso aumentar su atractivo electoral. Por ejemplo, los principales partidos suecos han seguido una estrategia de discriminación con respecto a los Demócratas Suecos (SD), populistas de extrema derecha, mientras que los partidos de centro-derecha han llegado hasta apoyar un gobierno minoritario de izquierda que comprende a los social-demócratas y los verdes. Sin embargo, esta estrategia, lejos de reducir los partidarios de SD, ha coincidido con un aumento de 12 puntos en su apoyo electoral en el transcurso de sólo ocho años. Y lo mismo podría decirse con respecto a otros partidos que actualmente componen en el Parlamento Europeo el grupo populista de derecha, irónicamente llamado, Identidad y Democracia.

Con todo, con el aumento de los partidos antisistema, el coste de las estrategias discriminatorias hacia ellos ha resultado insostenible en muchos países, y en los últimos años muchos han pasado de ser partidos “parias” a alcanzar el “poder” (Lange, 2008). Ejemplos recientes de partidos marginales discriminados que finalmente han accedido al gobierno son abundantes, y entre ellos se encuentran tanto actores de derecha (el Partido de los Finlandeses, Concentración Popular Ortodoxa en Grecia, la Nueva Alianza Flamenca en Bélgica, el Partido del Progreso en Noruega) como de izquierda (el Partido de la Refundación Comunista en Italia, el Partido de Autodefensa de la República de Polonia, el Partido de Izquierda Socialista en Noruega, *Podemos* en España). En Grecia e Italia, por ejemplo, los partidos populistas incluso han ganado suficiente apoyo electoral como para formar sus propios gobiernos de coalición cooperando entre sí.

**Reconciliación.** Un tercer posible remedio contra las fuerzas antisistema es la reconciliación. En lugar de aspirar a borrar a los partidos antisistema del mapa político, esta solución alternativa consiste en aceptarlos como parte del sistema de partidos mientras se busca neutralizarlos al tratar de acomodar sus quejas. Los partidos tradicionales, por ejemplo, pueden asumir algunos de sus temas programáticos - como limitar la inmigración o tomar medidas enérgicas contra la corrupción (Abou-Chadi, T. y Krause, 2020), lo que les permite influir en la elaboración de políticas desde el exterior, o incluso incorporar directamente a estos partidos en el gobierno. El razonamiento detrás de este enfoque de “si no puedes vencerlos, únete a ellos” es doble: por un lado, pretende socializar a los partidos antisistema en el proceso de gobierno y, por otro lado, los obliga a asumir la responsabilidad de los resultados de las políticas adoptadas (incluyendo la culpa de los eventuales fracasos). En otras palabras, los hace parte del *establishment*.

Este enfoque podría desactivar la amenaza constituida por estos partidos de varias maneras. En primer lugar, no hay que olvidar que el atractivo de estos partidos, especialmente a los ojos de los llamados “votantes protesta”, radica en gran medida en su carácter antisistema. Al denunciar unas élites corruptas y egoístas, los partidos antisistema pueden presentarse a sí mismos como representantes de la nación real, la gente real que se ha quedado atrás debido a la globalización, la cosmopolitización, la secularización o la europeización.

La capacidad de los partidos antisistema para atraer votantes también se debe en gran medida a la forma en que estos partidos, que nunca han tenido responsabilidades de gobierno, pueden presentarse: como salvadores de la sociedad. Sin experiencia gubernativa alguna ni conocimiento interno de los asuntos de gobierno, tienen la capacidad para proponer soluciones simples, pero muy atractivas para el votante desinformado, a problemas extremadamente complejos. La reacción de *Syriza* a la crisis de la deuda del gobierno de Grecia, incluida la celebración de un referéndum en 2015 en el que los votantes rechazaron (en última instancia sin éxito) las medidas de austeridad impuestas por la UE, es quizás el ejemplo reciente más ilustrativo.

La idea detrás de una estrategia de reconciliación es que una vez que los partidos anti-*establishment* son incorporados al gobierno asignándoseles una parte de las responsabilidades gubernamentales, se verán obligados a moderar sus posiciones con el riesgo incluso de llegar a su desaparición. Una vez que se conviertan en parte del sistema, los votantes llegarán a verlos como partidos no tan diferentes a los partidos tradicionales víctimas hasta entones de sus denuncias. Además de despojar a los partidos antisistema de su aura de pureza, darles un rol gubernamental también puede mostrar cuán simples fueron algunas de sus propuestas políticas.

*Podemos*, el partido de extrema izquierda español, puede servir como ejemplo reciente. Como resultado de los movimientos callejeros de protesta contra la austeridad de 2011, conocidos como los Indignados, que buscaban combatir la corrupción, mejorar la democracia y poner fin a la estructura política bipartidista en España, *Podemos* fue incorporado finalmente al gobierno nacional a principios de 2020. Plagado de escándalos (incluidas acusaciones de financiamiento ilegal), incapaz de cumplir promesas electorales clave como la reforma del mercado laboral y con la credibilidad de su liderazgo político en entredicho, el partido parece estar sufriendo una grave caída de sus apoyos electorales, como han puesto de manifiesto las recientes elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco.

A simple vista, esta solución podría considerarse más atractiva que cualquiera de las dos anteriores. No requiere coordinación entre los partidos tradicionales, como lo haría un cordón sanitario, o reforma legislativa alguna, como lo haría la prohibición partidista. Además,



parece más acorde con los principios democráticos fundamentales, como la libertad de expresión, reparto del poder y competencia equilibrada. En la práctica, sin embargo, hay varias razones por las que este remedio puede resultar desafortunado.

En primer lugar, los partidos tradicionales pueden mostrarse reacios a asumir la responsabilidad de domar al león antisistema. Después de todo, gobernar con socios inexpertos y poco fiables podría resultar contraproducente y socavar las futuras perspectivas electorales del “domador”. A menos de un año de las elecciones nacionales, las consecuencias de la decisión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de asociarse con *Podemos* siguen sin estar claras, pero los resultados del PSOE en las dos últimas elecciones autonómicas no dan motivos para el optimismo.

En segundo lugar, incluso si hay casos individuales en los que la participación ha llevado a la moderación y, finalmente, a la disolución o al declive (como en el caso de la Alianza Nacional en Italia y *Svoboda* en Ucrania), los académicos han descubierto que, en general, “los partidos no marginados no se han vuelto más moderados con el tiempo [...sino que siguen siendo...] tan radicales como sus primos marginados” (Akkerman, T. y Rooduijn, 2015: 1150). De hecho, la historia ha demostrado que dar a los partidos antisistema un rol en el gobierno no siempre termina con éxito. En algunos casos, como en el caso de la Nueva Alianza Flamenca belga o la *Lega* italiana, estos partidos han preferido abandonar sus posiciones de gobierno en lugar de moderar sus posturas ideológicas. En otros casos, como en el Partido de la Libertad de Austria o el Partido de los Finlandeses, su participación en el gobierno ha provocado divisiones internas y una mayor radicalización. En otros casos, son los partidos mayoritarios (como Ley y Justicia en Polonia) los que han terminado reformulando sus posiciones ideológicas para llenar el vacío dejado por la desaparición de sus socios de coalición populistas (la Liga de las Familias Polacas y el Partido de Autodefensa de la República de Polonia). Finalmente, la participación en el gobierno puede, si se sabe jugar bien, generar un impulso electoral para algunos partidos anti-*establishment* (como ha sucedido con el Partido Popular Suizo). En el peor de los casos, esto podría representar un camino hacia la toma del poder (como en la Alemania e Italia de entreguerras).

**Regeneración.** Si los enfoques antes mencionados han tenido un historial de éxito mediocre, esto puede deberse a que apuntan al síntoma (los partidos antisistema) y no tanto a la verdadera enfermedad: esto es, la crisis de los partidos tradicionales. Al fin y al cabo, para que sea eficaz cualquier cura debe encargarse del meollo del problema.

Primero, los partidos políticos necesitan invertir en construir organizaciones fuertes. Esto no quiere decir que puedan hacer retroceder el reloj y volver a convertirse en “partidos de masas” como en décadas pasadas, lo que si es cierto es que deben usar los nuevos métodos a su disposición (como las redes sociales) para revitalizar sus actividades en áreas clave como educación, socialización y mediación. Los partidos necesitan también una estructura profesional, financiamiento de sus bases y procedimientos claros para resolver conflictos internos y proceder a la toma de decisiones políticas (Bolleyer, 2013; Tavits, 2013). Sólo llevando a cabo estos cambios pueden los partidos, especialmente aquellos nuevos, sobrevivir y contribuir además a la institucionalización del sistema de partidos. Como vimos en el caso de Eslovenia Positiva, los partidos de nueva creación pueden llegar a ganar elecciones, pero sin organizaciones bien desarrolladas decaen y, al poco tiempo, desaparecen. Del mismo modo, ¡En Marcha! del presidente francés Emmanuel Macron, creado con el fin de ganar tanto las elecciones presidenciales como parlamentarias de 2017, obtuvo unos resultados bastante malos en las últimas elecciones locales. Estos casos contrastan claramente con los de, por ejemplo, los partidos socialis-

tas de Europa Occidental, quienes, tradicionalmente muy conscientes de la importancia de la fuerza organizativa, han logrado sobrevivir en la mayoría de los países, encontrando formas de hacer frente a cambios ideológicos y su declive electoral.

En segundo lugar, los partidos políticos deben ser receptivos (Mair, 2014). Como ya hemos señalado anteriormente, uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la democracia representativa es la falta de confianza en las instituciones representativas y responsables de la toma de decisiones, sobre todo en los partidos políticos. Especialmente teniendo en cuenta la frecuente tendencia de los políticos a hacer políticas contrarias a aquellas que han propugnado inicialmente, por ejemplo, aumentando los impuestos en vez de bajarlos o posponiendo reformas políticas que habían prometido. Por lo tanto, no es difícil entender que los votantes, sintiéndose traicionados, hayan ido abandonando los partidos tradicionales por otros alternativos y antisistema. Esto es particularmente cierto en países donde la convergencia ideológica entre los partidos tradicionales (cartelización) ha dejado a los votantes con los partidos populistas como única alternativa real. Para dar a los votantes una opción genuina, recuperar la confianza y recobrar su función tradicional como mediadores entre la sociedad y el Estado, los partidos deben aplicar políticas que sean coherentes con sus promesas electorales. En caso de que no puedan cumplir con esas promesas, deben poder explicar a los votantes el por qué. Este tipo de comunicación clara, por ejemplo, ha redundado en beneficio de gobiernos como el de Angela Merkel en Alemania, objeto de una buena evaluación por su enfoque realista y transparente de la crisis mundial causada por el Covid-19.

Pero los partidos políticos también deben ser responsables. Habitualmente, los partidos políticos tradicionales han sido más responsables que los partidos populistas (Mair, 2013), que se han distinguido por su tendencia a proponer soluciones simples a problemas complejos (como lo ilustra la reacción inicial de *Syriza* a la crisis económica de 2008 o las respuestas al problema del Covid-19 en Brasil, México, y Filipinas). Sin embargo, los partidos políticos tradicionales también pueden llegar a comportarse de una manera irresponsable como cuando han intentado equipararse a sus oponentes populistas, como hemos visto en las respuestas de otros gobiernos a la Gran Recesión y al Covid-19, así como en situaciones como el *Brexit* o la crisis migratoria de 2015 en Europa. Además, cada vez más partidos tradicionales se han dedicado a “prometer el oro y el moro”, comprometiéndose más de lo que pueden ofrecer y creando una situación de “subasta” (Barrio y Rodríguez-Teruel, 2017) en la que sus promesas irresponsables han sido imposibles de cumplir, etc. La situación actual en la región española de Cataluña es quizás uno de los ejemplos más claros.

Una parte importante de ser responsables es predicar con el ejemplo. En este sentido, es fundamental que los partidos políticos y sus líderes demuestren que no están por encima del estado de derecho. La pandemia del Covid-19 ha demostrado la importancia de dar ejemplo por parte de los líderes políticos. Cuando los líderes políticos son los primeros en ponerse en cuarentena o usar máscaras (como el canadiense Justin Trudeau y la alemana Angela Merkel), la confianza ciudadana tan necesaria en una situación de emergencia se ve incrementada (Bol *et al.*, 2021). Cuando, por el contrario, los parlamentarios no respetan las pautas de distancia social o los líderes políticos no cumplen la cuarentena, se rompe la confianza social, con un costo importante en vidas. De manera similar, cuando los partidos protegen a los políticos acusados de corrupción en lugar de expulsarlos o al menos suspenderlos, la brecha entre partidos y votantes crece, con repercusiones dañinas a largo plazo para la estabilidad del sistema de partidos (como hemos visto a raíz de importantes casos de corrupción como *Tangentopoli* en la Italia de

los 1990 o, más recientemente, el escándalo de la *Gürtel* en España). Sólo si los partidos políticos deciden usar un “bisturí” para cortar su podredumbre podrán prevenir su propio declive y el surgimiento de alternativas anti-liberales.

De hecho, uno de los principales caballos de batalla de los partidos antisistema ha sido la corrupción. Los políticos populistas han aprovechado este asunto con éxito en países tan diversos como Estados Unidos, Filipinas, Brasil, Italia, España, República Checa y Ucrania. Por esta razón, es crucial que los partidos políticos sean más transparentes en términos de financiación. Los votantes deben poder averiguar, preferiblemente en poco tiempo, cómo se gasta su dinero, ya provenga de donaciones o de subsidios estatales. Esto es especialmente importante cuando los partidos políticos son financiados con fondos públicos, una práctica que se ha demostrado que fomenta la institucionalización tanto de los partidos (Bolleyer y Ruth, 2018) como de los sistema de partidos (Casal Bértoa, 2017), impide la polarización (Casal Bértoa y Rama, 2022) y ayuda a combatir la corrupción cuando se implementa a través de un sistema transparente y liberal (Hummel *et al.*, 2021).<sup>4</sup> Con este fin, el uso de nuevas tecnologías que permitan a los partidos políticos informar sobre sus gastos e ingresos de manera detallada y a tiempo es fundamental para recuperar la confianza ciudadana. Si lo hacen, no sólo impedirán que los partidos antisistema los ataquen como unos partidos corruptos y egoístas, sino que ayudarán a recuperar parte de la confianza perdida por sus votantes. Por supuesto, la transparencia no debería limitarse a las finanzas del partido, sino que también debe extenderse a los procesos internos de selección de liderazgo, toma de decisiones y resolución de conflictos, por nombrar sólo algunos ejemplos.

Los partidos políticos deben también adoptar una perspectiva a largo plazo. Actualmente, una de las principales líneas de crítica contra los partidos es que sólo piensan en las próximas elecciones o en la próxima encuesta. Es cierto que la proliferación de elecciones en algunos países (por ejemplo, locales, regionales, presidenciales y europeas) ha puesto a los partidos constantemente en modo de campaña (Mair, 2013). No obstante, esto no es excusa para que los programas de los partidos cambien como veletas en lugar de constituir visiones a largo alcance basadas en análisis profundos, aunque siempre ajustándose a las circunstancias del momento. Pocas cosas socavan tanto la confianza de los votantes como los postulados programáticos llevados por el viento.

Los partidos también deben recordar que llegar a compromisos políticos constituye la esencia de todo juego democrático. La democracia representativa tiene mejor reputación en aquellos países donde los partidos políticos han llegado a acuerdos sobre una serie de temas fundamentales que donde la legislación está en constante cambio en función del gobierno de turno (como ocurre en gran parte de América Latina y el sur de Europa). En este último tipo de situación es mucho más fácil que prosperen los partidos populistas. Éstos aprovechan las cuestiones culturales (donde los compromisos siempre son más difíciles) para causar verdaderos estragos, como hemos visto en España, Italia, Grecia, Polonia y Hungría.

En este sentido, los partidos del *establishment* no deben caer en la trampa populista de ver la democracia como un juego de suma cero. Los partidos tradicionales deben siempre evitar adoptar no sólo la agenda, sino también la retórica de los antisistema. Sólo aceptando que todos tienen derecho a ser escuchados, que la alternancia de gobiernos es intrínseca a la democracia y que, a largo plazo, suele ganar el partido con

---

<sup>4</sup> Por eso quizás no sea sorprendente que algunos partidos antisistema (por ejemplo, en Bulgaria, Italia y Polonia) hayan hecho de la abolición del financiamiento público de los partidos una de sus propuestas programáticas.

mejores políticas, los partidos tradicionales podrán mejorar sus perspectivas electorales y frenar la marea populista.

Los analistas coinciden ampliamente en que la democracia representativa se enfrenta a una crisis. Nuestros hallazgos no sólo refuerzan este punto de vista, sino que también sugieren que el surgimiento de partidos antisistema, lejos de ofrecer una oportunidad, afecta negativamente a todas las dimensiones de la democracia. Sin embargo, centrar toda la atención en la amenaza populista actual no producirá una solución satisfactoria. En vez de ello, lo que debemos hacer es obviar el síntoma y centrarnos en la enfermedad subyacente: la crisis de los partidos políticos tradicionales.

Las reacciones al surgimiento de fuerzas políticas antisistema han pasado, hasta ahora, por cuatro de las denominadas “cinco etapas del duelo”: se ha pasado de la negación (prohibición) a la ira (cordón sanitario) y de ahí a la negociación (reconciliación) y finalmente a la depresión, que parece ser la fase actual. Pero si vamos a hacer retroceder la ola populista, primero debemos aceptarla por lo que es: un síntoma del fracaso de los partidos políticos tradicionales en materia de representación, movilización y cumplimiento. Tanto los académicos como los expertos deben entender que los primeros tres enfoques descritos anteriormente no resolverán el problema. Sólo trabajando por su propia regeneración pueden los partidos políticos tradicionales recuperar la confianza de los ciudadanos, derrotar al populismo y salvar y revitalizar la democracia.

## Referencias bibliográficas

- Abedi, A. (2004): *Anti-Political Establishment Parties: A Comparative Analysis*. London: Routledge.
- Abou-Chadi, T. y Krause, W. (2020): “The Causal Effect of Radical Right Success on Mainstream Parties' Policy Positions: A Regression Discontinuity Approach”, *British Journal of Political Science* v. 50, n. e, pp. 829–47.
- Akkerman, T. y Rooduijn, M. (2015): “Pariahs or Partners? Inclusion and Exclusion of Radical Right Parties and the Effects on Their Policy Positions”, *Political Studies*, v. 63, n. 5, pp. 1140–1157.
- Barrio, A. y Rodríguez-Teruel, J. (2017): “Reducing the Gap Between Leaders and Voters? Elite Polarization, Outbidding Competition, and the Rise of Secessionism in Catalonia”, *Ethnic and Racial Studies*, v. 40, n. 10, pp. 1776–94.
- Biezen, I van (2004): “Political Parties as Public Utilities”, *Party Politics*, v. 10, n. 6, pp. 701–722.
- Bol, D., Giani, M., Blais, A. y Loewen, P.J. (2021): “The Effect of COVID-19 Lockdowns on Political Support: Some Good News for Democracy?”, *European Journal of Political Research*, v. 60, n. 2, pp. 497–505.
- Bolleyer, N. (2013): *New Parties in Old Party Systems: Persistence and Decline in Seventeen Democracies*. Oxford: Oxford University Press.
- Bolleyer, N. y Ruth, S.P. (2018): “Elite Investments in Party Institutionalization in New Democracies: A Two-Dimensional Approach”, *Journal of Politics*, v. 80, n. 1, pp. 288–302.
- Bourne, A.K. y Casal Bértoa, F. (2017): “Mapping ‘Militant Democracy’: Variation in Party Ban Practices in European Democracies (1945–2015)”, *European Constitutional Law Review* v. 13, n. 2, pp. 221–47.
- Casal Bértoa, F. (2017): “It's Been Mostly About Money! A Multi-Method Research Approach to the Sources of Institutionalization”, *Sociological Methods and Research*, v. 46, n. 4, pp. 683–714.

- Casal Bértoa, F. y Bourne, A. (2017): "Prescribing Democracy? Party Pro- scription and Party System Stability in Germany, Spain and Turkey", *European Journal of Political Research*, v. 56, n. 2, pp. 440-465.
- Casal Bértoa, F. y Enyedi, Z. (2021): *Party System Closure: Party Alliances, Government Alternatives and Democracy in Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Casal Bértoa, F. y Rama, F. (2022): "Paying for Appeasement: On the Moderating Role of Public Subsidies in East Central European Party Politics", *Party Politics*, v. 28, n. 4, pp. 611-624.
- Casal Bértoa, F. y Rama, J. (2020): "Party Decline or Social Transformation? Economic, Institutional and Sociological Change and the Rise of Anti-Political-Establishment Parties in Western Europe", *European Political Studies Review*, v. 12, n. 4, pp. 503-23.
- Heinze, A-S. (2018): "Strategies of Mainstream Parties Towards Their Right- Wing Populist Challengers: Denmark, Norway, Sweden and Finland in Comparison", *West European Politics*, v. 41, n. 2, pp. 287-309.
- Hummel, C., Gerring, J. y Burt, T. (2021) "Do Political Finance Reforms Reduce Corruption?", *British Journal of Political Science*, v. 51, n. 2, pp. 869-889.
- Katz, R.S. y Peter Mair, P. (2018): *Democracy and the Cartelization of Political Parties*. Oxford: Oxford University Press.
- Laclau, E. (2005): *On Populist Reason*. London: Verso.
- Lange, S.L. de (2008): *From Pariah to Power: The Government Participation of Radical Right-Wing Populist Parties in West European Democracies*. Tesis doctoral en la Universidad de Antwerp.
- Leeuw, S.E. de y Bourne, A.K. (2020): "Explaining Citizen Attitudes to Strategies of Democratic Defense in Europe: A Resource in Responses to Contemporary Challenges to Liberal Democracy?", *International Journal of Public Opinion Research*, v. 32, n. 4, pp. 694-710.
- Loewenstein, K. (1937): "Militant Democracy and Fundamental Rights", *American Political Science Review*, v. 31, n. 3, pp. 417-32.
- Mair, P. (2014): "Representative vs. Responsible Government," in Ingrid van Biezen (ed.) *On Parties, Party Systems and Democracy: Selected Writings of Peter Mair*. Colchester: ECPR Press, 2014.
- Mair, P. (2013): *Ruling the Void: The Hollowing-Out of Western Democracy*. London: Verso.
- Mudde, C. (2019): *The Far Right Today*. Cambridge: Polity.
- Mudde y Rovira Kaltwasser, C. (2017): *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Rama, J. y Casal Bértoa, F. (2020): "Are Anti-Political-Establishment Parties a Peril for European Democracy? A Longitudinal Study from 1950 till 2017", *Representation* v. 56, n. 3, pp. 387-410.
- Rosanvallon, P. (2008): *Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tavits, M. (2013): *Post- Communist Democracies and Party Organization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Urbinati, N. (1998): "Democracy and Populism," *Constellations* 5 (March).
- Venice Commission (2000): *Guidelines on Prohibition and Dissolution of Political Parties and Analogous Measures*. Strasbourg: Council of Europe.
- Venice Commission y OSCE/ODIHR (2011): *Guidelines on Political Party Regulation*. Warsaw: OSCE/ODIHR.

\* Este artículo fue publicado originalmente en lengua inglesa en el *Journal of Democracy*, v. 32, n. 1, pp. 37-51 (2021): <https://muse.jhu.edu/article/778231>.